

# Un caso histórico de defensa del patrimonio: el Castillo de San Marcos de El Puerto de Santa María

José Ramón Barros Caneda

*Historiador de Arte*

La incorporación de El Puerto de Santa María a la Corona en el año 1729 se produjo tras una ardua negociación entre la Casa de Medinaceli y la monarquía en la que se acordó que el castillo de San Marcos quedara fuera del decreto, manteniéndose en consecuencia como propiedad ducal<sup>1</sup>. Pese a esta decisión, el inmueble, de gran importancia para la ciudad, se convertirá en el centro de una serie de cuestiones urbanísticas y culturales en las que se advierten problemas de mayor profundidad, tales como la identificación de la ciudad con su elemento más representativo y antiguo y cuya presencia dominaba, como hito visual, la villa de El Puerto. Así, el castillo de San Marcos será el eje de una intensa polémica entre la casa de Medinaceli y la ciudad. El punto de partida residía en la necesidad de construir una nueva cárcel, dado el estado ruinoso que mostraba la que estaba en uso. Aprovechando esta circunstancia el proyecto se ampliaría a un edificio que albergase tres de las oficinas representativas del poder municipal: el ayuntamiento, la cárcel y la alhóndiga. El debate se inicia en 1757 con propuestas totalmente divergentes para la ubicación del nuevo edificio. Así, algunos caballeros capitulares estimaban que la cárcel debía repararse y permanecer en el lugar en que estaba. Por otra parte, el resto de los capitulares, que componían la mayoría del cabildo, estaban conformes con la nueva edificación y avalaban su propuesta con los informes del maestro mayor de la ciudad que la situaba en la plaza de las Galeras. El Gobernador, por último, proponía construirla en la plaza del castillo. Finalmente se inició en este lugar, si bien a petición del duque se paralizó una vez comenzada<sup>2</sup>. Y es justamente en la solicitud que hace el duque al rey para la paralización de las obras donde figuran ya algunos aspectos importantes que dejan entrever el simbolismo, ligado a valores representativos de la casa señorial, que este inmueble había adquirido en la mitad del siglo XVIII y que si bien es esgrimido por su propietario para conseguir evitar que se anulara

su preeminente valor urbanístico, será posteriormente, como veremos, asumido por la propia ciudad.

La petición de detención de las obras que se habían iniciado en el frente del castillo, lugar que hoy ocupa la primitiva pescadería de la ciudad, arguye que la intención de la ciudad, y en consecuencia del poder municipal, era anular al castillo "que ha estado siempre a la vista del Río Guadalete, sin impedimento alguno y esto solo por borrar la memoria de la casa de mi parte y sus ascendentes, y que no se vean sus torreones y blasones que mudamente la estan indicando"<sup>3</sup>, y que si se llegara a construir el Ayuntamiento y la cárcel se sepultarían "las vistas principales del referido castillo, sus torreones, almenas y trofeos por haber de tener mas altura dichas casas según las medidas que se han tomado, como consta de la información judicial que en debida forma presento y declaración de otros dos maestros mayores nombrados por el ayuntamiento de aquella ciudad"<sup>4</sup>. Esta encarecida defensa del entorno del inmueble para mantener su valor y posición simbólica asociada a la casa de Medinaceli y su relación con la ciudad de El Puerto hacen pensar en un valor añadido que se aleja del puramente económico o funcional y al que se recurre a la hora de valorarlo y protegerlo de amenazas urbanísticas y agresiones de cualquier naturaleza.

La argumentación esgrimida por la casa de Medinaceli que tuvo efectos inmediatos<sup>5</sup>, no dejaba de ser una artimaña dentro del proceso de enfrentamiento con la ciudad. Y así puede observarse por cuanto unos años más tarde, en 1761, el duque decidió poner en venta el castillo. Para ello se procedió a su aprecio, tasándose en 684.160 reales de vellón y valorándose la renta de su posible arrendamiento, incluidas las modificaciones que le pudieran efectuar, en 450 reales mensuales. La propuesta de venta del castillo en la que la ciudad tenía el derecho de tanteo, obligó a solicitar un informe al Cabildo para que expusiera sus criterios sobre esta nueva situación y conocer su interés por acceder a este derecho.

El acuerdo de los capitulares fue unánime y se emitió en un extenso informe en el que además de constatar que la ciudad, dada su penuria económica, no podía

acceder al derecho de tanteo, se exponían una serie de razones para impedir la venta, acudiendo al rey para que actuara de valedor ante el duque<sup>6</sup>.

Es justamente este escrito emitido por el cabildo en pleno el que muestra una extensa y razonada relación de justificaciones para que se evitara la venta y destrucción del inmueble. Es posible que en el fondo de todo se hallaran cuestiones puramente económicas —la ciudad no podía adquirir el castillo y trataba de evitar su venta a otro comprador—, o tal vez de oposición al poder que la casa de Medinaceli mantenía en la ciudad —así lo hemos visto en los problemas surgidos con el edificio del ayuntamiento—<sup>7</sup>, o tal vez fuera una suma de las dos. Sea como sea, la argumentación en la defensa de este patrimonio cultural se basa en criterios muy sólidos, que abarcan lo histórico, lo religioso y la identidad cultural de la ciudad.

El escrito arranca de una premisa general en la que se afirma lo necesario de la protección y defensa de las pertenencias de los vínculos, sirviendo como preludeo a una severa crítica a la casa de Medinaceli por el abandono en que tenía sumido el suyo. La “desidia de dichos señores y no de su invencible desgracia por el deterioro en que dejaron menoscabado el dicho vínculo, y en una palabra ha destruido y desfigurado el esplendor de los antiguos y la grande opulencia con que esta ciudad después de la de Sevilla se hacía memorable en toda España”<sup>8</sup>. Esta situación unida a los saqueos producidos en la ciudad en 1702<sup>9</sup>, que habían generado notables pérdidas en el patrimonio de la ciudad, dejaba al castillo de San Marcos como principal elemento de identificación histórico y cultural de la ciudad. En este sentido son diversos y variados los argumentos que se utilizan para la defensa y protección de la fortaleza. Desde ellos se vislumbra el sentir de los representantes de la ciudad sobre el inmueble y cómo esta arquitectura concreta, ligada al origen de la ciudad, adquiere un valor simbólico en el cual la misma ciudad confirma su definición como entidad cultural. El primer argumento es el que hoy día citaríamos como valor tipológico. Función y forma se aliaban en un edificio singular que había sido “en los tiempos antiguos la mas segura fortaleza” permaneciendo, y así lo cita el escrito, como uno de los “más distinguidos Monumentos del reino”. Ese valor tipológico, una vez alejada la cuestión bélica, adquiere un valor simbólico y de representatividad, tal vez vinculado a su recio aspecto de fortaleza, y por ello la ciudad instaló en él su archivo y Ayuntamiento, identificando así el inmueble con el poder municipal y ahondando en ese sentido de unidad de la ciudad con el castillo. La antigüedad es otro de los factores de valoración del edificio, cuya fábrica “quando no fue la primera de los quatro mil años de la población de España, no hay la menor duda que lo es de la Andalucía contemporanea con Cádiz y sus contornos”. Es en suma el necesario referente histórico que crea, identifica y justifica los grupos sociales. También figura el argumento antropológico estableciendo un vínculo entre el castillo, la ciudad y su sentir y origen religioso. El origen “mítico” de la formación cristiana de la ciudad es de gran importancia, pues suponía apagar el



decisivo vínculo musulmán. En el castillo se localizó una imagen de la Virgen que sirvió para dar nombre a la ciudad —Santa María, además de pasar a formar parte junto con el propio castillo de la iconografía del escudo de la ciudad. De esta manera, la desaparición del edificio suponía un importante agravio para el sentir municipal y una ruptura con la línea mítica e histórica que el castillo representaba. Por otra parte, la existencia de una iglesia en su interior, la primera iglesia de la ciudad, ocupando el lugar, ya sagrado para los árabes, de una mezquita, era un importante argumento de orden social al que apoyaba el que la desaparición de los elementos que componían el escudo de Armas supondría una ofensa para el propio Rey por lo cual se pide su amparo para la protección del castillo de San Marcos.

Todos estos son valores añadidos que se incorporan al inmueble como elementos de su defensa como patrimonio indisoluble de la ciudad. Valores que nada tienen que ver con los económicos y cuya valoración reside en motivaciones de orden cultural. De hecho los propios capitulares los mencionan como aspectos que jamás podrán entrar a formar parte de una valoración arquitectónica de carácter técnico, dado que para estos conceptos “no pueden darse reglas de tasación hechas”.

Pero si importantes eran estas justificaciones comentadas, no menos lo eran las meramente económicas, rebatiéndose todos los argumentos de estas características que apoyaban la destrucción del inmueble. Un problema importante de toda esta polémica, ya dijimos, residía en la falta de poder económico de El Puerto que se hallaba “con fondos en sus propios y arbitrios, aun para los precisos indispensables gastos anuales y (...) bastante empeñada”, lo cual le impedía ejercer el derecho de tanteo sobre la compra del inmueble. Pero la argumentación refleja que aun en el



caso de poder adquirirlo para su posterior venta no sería provechoso dado lo antiguo de sus materiales y el gravísimo perjuicio para la ciudad. Y aún pensando en el derribo, el costo de la nueva fábrica sería excesivo dada su "incomparable solidez".

Esta es en suma la compleja situación que se vivía en El Puerto en torno al año 1760, sobre una cuestión de vital importancia arquitectónica y cultural para la ciudad. Esta defensa a ultranza del castillo de San Marcos por los capitulares implicaba un proceso de identificación con este inmueble. No obstante, y ya lo hemos resaltado, existía un litigio importante entre la ciudad y la casa de Medinaceli que partía de la incorporación de la villa a la Corona y que tenía como origen divergencias en las posesiones de tierras. Pese a

esta cuestión, propiamente económica, sí es cierto que la argumentación desarrollada por los capitulares para la protección y defensa del edificio contiene unas pautas de valoración que rompen el molde de lo puramente económico y se instalan en el ámbito de la defensa del patrimonio cultural, en este caso arquitectónico en el cual se vertían elementos culturales y valores históricos que permitían identificar a la ciudad y crear un importante lazo entre ella y sus habitantes. Son como hemos visto, elementos de índole histórico, institucional, social y religioso.

En función de este documento que evitó en ese momento y tal vez en algún otro la desaparición o venta indiscriminada del inmueble, podemos hablar de un cierto sentido de protección y defensa del patrimonio monumental —el texto cita como Monumento al castillo—, en El Puerto de Santa María. Evidentemente no resulta comparable y desde luego nada tiene que ver con la legislación específica existente hoy día sobre el patrimonio histórico, pero es indudable, y así lo refleja el documento, la concienciación que los capitulares habían adquirido para la defensa de ese elemento concreto del patrimonio de la ciudad. Los aspectos ya comentados sobre la protección del entorno y, desde luego, la interesante justificación que se realiza de los valores del castillo de San Marcos podrían asemejarse, salvadas las formas y las distancias, a las actuales justificaciones que hoy día se realizan en los complejos expedientes que se generan para la protección del patrimonio histórico. Estos valores expuestos como sustento de la defensa del castillo mantienen grados de validez actuales y definen o al menos dibujan parte del proceso histórico en la defensa y protección del patrimonio histórico.

## Notas

1. Al respecto véase IGLESIAS RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ: *Una ciudad mercantil en el siglo XVIII. El Puerto de Santa María*. Sevilla, 1991. Pág. 28 y ss.
2. Al respecto véase BARROS CANEDA, JOSÉ RAMÓN: *Arquitectura y urbanismo en El Puerto de Santa María durante el siglo XIX*. Tesis doctoral leída en Sevilla. En prensa.
3. Archivo municipal de El Puerto de Santa María (en adelante A.M.P.S.M.). Papeles antiguos. Apéndice al leg. 74-R. T. XXCII Bis. 1770. S/f.
4. Ibidem.
5. Las obras se paralizaron de inmediato y nunca se llevó a cabo las construcción del edificio proyectado. No fue hasta 1778 que, aprovechando la parte ya construida, se ejecutó la obra de la pescadería, modificándose a una sola planta.
6. A.M.P.S.M.. Actas capitulares, 1761. Fol. 56-63.
7. Existía un problema con las tierras de la ciudad. El decreto de incorporación a la corona establecía que determinados elementos permanecían como propiedad ducal. Como señala Iglesias Rodríguez la pérdida del Señorío de El Puerto no fue tan grave para la hacienda ducal. De hecho, el duque consiguió que le fueran devueltos una serie de bienes y derechos, cuya propiedad le convertía en el principal latifundista del término, quedando en su poder más de 800 hectáreas de tierras. Véase IGLESIAS RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ: *Una ciudad mercantil...* Op. Cit. Pág. 33-34. En este mismo sentido también resulta interesante señalar que en el propio documento que tratamos aparece una mención a esta situación que resultaba especialmente gravosa para la ciudad. Así el texto se refiere al agravio que se le había hecho a la ciudad al no poder valerle "de su derecho que tiene para reclamar la recuperación de sus bienes dotales en las dehesas de Villarana, Hato de la Carne, Coto y otras que componían su término". A.M.P.S.M. Actas capitulares. 1761. Fol. 56-63.
8. A.M.P.S.M.. Actas capitulares. 1761. Fol. 56-63.
9. En agosto de 1702 una escuadra anglo-holandesa pretendió la toma de Cádiz, arrasando en su intento Rota y El Puerto de Santa María cuyo castillo se rindió el 3 de septiembre del mismo año. Al respecto véase IGLESIAS RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ: *El Puerto de Santa María*. Cádiz, 1985. Pág. 67-68.